

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta 207

Proyecto discutido y aprobado en Sala virtual

Medellín, primero (1°) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso presentado y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública, en el proceso ordinario laboral interpuesto por la señora **LUISA FERNANDA CARREÑO SARRIA** contra **COLPENSIONES, Y PORVENIR S.A.**

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicitó que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS a través de **Porvenir S.A.**; y, en consecuencia, se reactive su afiliación al RPM administrado por **Colpensiones**.

Se reconozca pensión de vejez, de acuerdo a la ley 797 de 2003, desde el cumplimiento de los requisitos y costas del proceso.

Hechos

La actora nació el 21 de octubre de 1960, fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** para los riesgos de **IVM**, el 03 de septiembre **de 1986**, se trasladó al RAIS a través de **Porvenir S.A.** el 26 de febrero de 1998.

El Fondo no le brindó la debida información al momento del traslado, de forma clara, precisa y veraz, sino que únicamente le habló de las ventajas que tenía dicho régimen, más no de las desventajas.

Contestación Colpensiones

Entidad que por intermedio de apoderada indicó que, es cierto que la actora fue su afiliada y que desconoce las particulares del traslado al RAIS.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Carga dinámica de la prueba, falta de causa para pedir, inexistencia de vicios del consentimiento, error de derecho no vicia el consentimiento, imposibilidad de traslado, prueba de legalidad de actos jurídicos, cobro de lo no debido, buena fe, improcedencia de condena en costas, prescripción y enriquecimiento sin causa, conmutación pensional.

Contestación Porvenir S.A.

Esta administradora a través de apoderada dio respuesta a la demanda indicando que es cierto que la actora se trasladó a ese Fondo, sin embargo, se le brindó la información clara y precisa que se exigía para el momento y su traslado fue libre y voluntario.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Prescripción, buena fe e cobro de lo no debido.

Sentencia de primera instancia

La Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **16 de julio de 2022**, declaró que el traslado de la actora al RAIS administrado por **Porvenir S.A**, es ineficaz.

Ordenó a Porvenir S.A., que como consecuencia de la ineficacia del traslado trasladara a **Colpensiones**, todos los valores recibidos con motivo de la afiliación de la actora, esto es, cotizaciones, bonos pensionales, los rendimientos, sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora y cuotas de administración.

Condenó a Colpensiones a reconocer pensión de vejez en los términos de la ley 797 de 2003, a partir de la última cotización, esto es 1° de julio de 2020, con un IBL de \$4.211.441, de los últimos 10 años por ser más favorable a sus intereses, por lo tanto, un retroactivo en la suma de \$69.666.185, liquidado entre 1° de julio de 2020 y mayo de 2022, continuar pagando a partir de 1° de

junio de 2022 la suma de \$2.923.368., autorizó los descuentos en salud y condenó a Porvenir a las costas del proceso.

Recurso Porvenir S.A.

La recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, en cuanto la entidad sí le brindó la información clara y precisa al momento del traslado, según las exigencias vigentes a la época 1998.

El único móvil para el traslado es que la entidad es desordenada y el monto de la pensión, pero sin embargo duró en dicho fondo por más de 22 años.

En caso de confirmarse la sentencia solicita que no se ordene la devolución de gastos de administración y seguros previsionales, en razón a que este descuento se encuentra autorizado por el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y se causaron producto de la buena gestión de administración de la entidad.

En lo referente a la devolución de las primas de seguros previsionales expresa que estas ya fueron pagadas a terceros de buena fe que protegieron frente a los riesgos de invalidez y muerte al afiliado durante el tiempo que estuvo vigente su vinculación.

Ordenar esa devolución sería contribuir con un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones y no tiene sentido si lo que busca la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban, porque entonces no hubiera existido unos rendimientos. Además, no se debe condenar en costas y agencias en derecho.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en la ley 2213 de 2022. Colpensiones manifestó:

En primer lugar, es oportuno hacer mención el art. 13 de la Ley 100 de 1993, que aseguró la libertad en escogencia de régimen pensional, por su parte el Decreto 663 de 1993 el cual aplica como regulación para las Administradoras de Fondos de Pensiones, toda vez que hacen parte del sistema como instituciones financieras privadas de carácter previsional encargadas de administrar eficientemente los fondos y planes de pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad y de los fondos de cesantías en Colombia; estableció en el Art. 97 la importancia del deber de informar al consumidor financiero, adicionalmente el decreto 692 de 1994, en su artículo 5 establece que las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de

ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo. Ahora bien, es oportuno mencionar que solo para el 2014, con la expedición de la ley 1748, se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros y consecuentemente diferentes niveles de intensidad del deber de información según la legislación vigente.

Descendiendo al caso concreto las premisas normativas antes referidas, podemos indicar y consecuentemente colegir, lo siguiente: El traslado de régimen del afiliado (a) – demandante, y selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ocurrió en el 26 de febrero de 1998, en vigencia del Decreto Ley 663 del 02 de abril de 1993 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.”, solo se exigía a las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel.

Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad de la demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la Corte Suprema de Justicia tratándose de afiliaciones tacitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral. En razón de lo anterior, podemos colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben de estar a cargo de la demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación de la parte actora, y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, imponerle una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, pues con ello se acentuaba el consentimiento y aceptación por el afiliado, sería una carga desproporcionada e imposible de cumplir

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la práctica de la prueba decretada en el proceso, se colige del interrogatorio de parte realizado a la señora LUISA FERNANDA CARREÑO SIARRAS, que nadie la obligó a efectuar su traslado al Régimen de ahorro individual, sino que el mismo lo realizó de manera voluntaria. Ahora bien, en cuanto al reconocimiento de la pensión de vejez, no es procedente otorgar este derecho como pensionado en el Régimen de Prima Media Con Prestación Definida, atendiendo a que el traslado de la demandante se realizó de forma voluntaria y espontánea y COLPENSIONES no intervino,

ni afectó en forma alguna su decisión, por lo que en este sentido no es el fondo competente para resolver el derecho prestacional, pues este radica en PORVENIR S.A, mismo al que se encuentra afiliada la señora LUISA FERNANDA CARREÑO SIARRAS, además no es procedente reconocer la pensión bajo los postulados de la ley 100 de 1993 establecidos en el sistema general de pensiones para el régimen de prima media, dicho reconocimiento debe realizarse bajo las diferentes modalidades que existen en el RAIS

Por todo lo anterior, de manera muy respetuosa le solicito a los señores magistrados REVOCAR la sentencia de primera instancia íntegramente. Ahora bien, en caso de que la decisión en esta instancia sea la de confirmar la sentencia emitida por la Juez 18 Laboral del Circuito, respetuosamente solicito a los señores magistrados indicar claramente en la sentencia que la AFP PORVENIR S.A. traslade a Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la señora LUISA FERNANDA CARREÑO SIARRAS, tales como: (i)cotizaciones, (ii) bonos pensionales, (iii) sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, (iv) cuotas de administración y la indexación de las mismas, (v) el porcentaje de garantía de pensión mínima y (vi) el traslado de los reaseguros y seguros previsionales; tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1689 de 2019; SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, entre otras.

Alegatos actor

Manifestó el apoderado que se adhiere a los argumentos esgrimidos en la etapa de alegatos en primera instancia y al contenido del escrito de demanda, para que en su digno cargo confirme en su integridad la sentencia proferida en primera instancia por el juzgado dieciocho laboral del circuito de Medellín, el pasado 17 de junio de 2022.

Alegatos Porvenir S.A.

En este punto se debe anotar que, no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Prima Media con Ahorro Individual, pues la decisión dela parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.

El fondo al momento de realizar el traslado de la parte accionante al Régimen de Ahorro Individual, cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues, se le entregó a la parte demandante la información necesaria y obligatoria para la época dentro del

mismo Formulario, el cual se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Adicionalmente la parte demandante contó con varias oportunidades para trasladarse nuevamente de régimen y no lo hizo, por el contrario, permaneció en el mismo régimen pensional privado, de lo cual solamente es posible concluir que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Por otro lado, la parte actora manifiesta que su motivación para iniciar este proceso es la diferencia en la mesada pensional entre los regímenes. Por lo tanto, es palmario que lo que motiva a la parte demandante a solicitar la nulidad o ineficacia de su traslado de régimen de pensiones no reposa en la forma en cómo este se produjo, sino en el supuesto hecho de no cumplirse sus expectativas sobre el eventual monto de la pensión que recibiría en este; monto que, como es obvio suponer, no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento. Esa es la razón por la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que de la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse un engaño.

Aunado a lo anterior, Se recuerda que la prueba documental que extraña el juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, teniendo en cuenta lo anterior, no es cierto que mi representada se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado.

En el presente proceso también se avizora un incumplimiento de la parte accionante del deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, lo anterior queda corroborado con el accionar sistemático y reiterado por la parte demandante, pues ésta dentro de su interrogatorio de parte, manifestó en diferentes ocasiones, no haber realizado comparaciones con otros Fondos Pensionales, no haber hecho preguntas o indagaciones en el momento de suscripción del formulario y no hacer uso de los diferentes canales de atención al usuario que tiene mi representada.

Ahora bien, si de decidiera por parte del Honorable Tribunal, confirmar la condena y declarar la ineficacia de la afiliación, se solicita que no se modifique la decisión y se condene a mi representada a trasladarlos dineros descontados

por Gastos de administración, que son permitidos por el art. 20 de la ley 100 de 1993.

Toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo constitucional, la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por lo que es imperioso en la actualidad, y de acuerdo a la coyuntura económica, hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar solicitudes de traslados que no cuentan con los requisitos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, tal y como se estudió por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sala extraordinaria del 14 de agosto de 2019 a las 2 PM en virtud de lo establecido en el artículo 35 del CGP donde decidió unificar su jurisprudencia, en sentencia dentro del proceso del proceso 05001310500720150129501 negando las ineficacias de traslado en la afiliación, con base en la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Las anteriores conclusiones frente a la ineficacia en la afiliación y en la manera en cómo deben operar las restituciones mutuas para hacer compatible el régimen y la sostenibilidad del sistema se han recogido y enriquecen con el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020.

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia de conformidad con el recurso interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, serán: (i) Determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen resulta o no eficaz, en caso de que se declare la ineficacia (ii) Establecer que conceptos está obligado a trasladar **Porvenir S.A.** a **Colpensiones**, (iv) si la actora acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez, cual es el IBL aplicable, y a cuánto equivale el retroactivo adeudado (v) si operó la prescripción y (vi) si procede no condenar en costas a Porvenir S.A.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Luisa Fernanda Carreño Sarria** nació el 3 de septiembre de 1986.
2. Se afilió Colpensiones el 21 de octubre de 1986.
3. El **26 de febrero de 1998** suscribió formulario de afiliación a **Porvenir S.A.**

4. Acredita en toda la vida laboral 1307

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL782 de 2021.

En las últimas providencias citadas, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectuó el vínculo, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: primer periodo, desde la fundación de las AFP, segundo momento, desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y tercer momento, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de la **AFP Porvenir S.A.**, se efectuó el **26 de febrero de 1998**, lo que corresponde con el primer momento, ciclo para el cual según lo expresado en la sentencia **SL-1452-2019** la obligación de la administradora privada demandada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es la de demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Porvenir S.A.** al contestar la demanda y en el recurso indicó que antes de efectuarse la suscripción del formulario de traslado, le suministró a la actora una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS, sin embargo, consultado el expediente no se advierte prueba alguna que permita establecer que existió una información cualificada al momento de la vinculación.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

A partir de lo anterior, encuentra la Sala que no demostró **Porvenir S.A.** que cumpliera con su deber de información, por la consecuencia es que la afiliación efectuada a este fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, y en ese sentido se **Confirmará** la decisión de primera instancia.

De los efectos de la ineficacia

La Juez de primera instancia **condenó** a **Porvenir S.A.**, a trasladar a **Colpensiones** los gastos de administración, y las primas de seguros previsionales y reaseguros, orden a la que se opone la apoderada de Porvenir, bajo los siguientes argumentos: i) los dineros cobrados por estos conceptos tuvieron como fundamento el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y se descontaron por una efectiva gestión y ii) las sumas descontadas ya fueron trasladadas a terceros de buena fe que cubrieron las contingencias.

En ese orden, en lo que refiere al punto i), para la Sala es claro que durante el periodo en que la actora estuvo vinculada al RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, por lo que precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto del que se le privó de recibir como consecuencia del acto declarado ineficaz.

Ahora, en lo que refiere a lo pagado por ii) seguros previsionales por parte de la AFP del RAIS, debe indicarse que de autorizarse descuento alguno por este concepto se estaría disminuyendo el valor del porcentaje de debió corresponder a **Colpensiones**, desmejora que deben asumir los fondos de pensiones demandados con cargo a su propio patrimonio.

Así las cosas, queda resuelto el recurso presentado por la apoderada recurrente, indicando que se desestima su petición, sin embargo, siendo este un aspecto conocido en el grado de consulta es necesario dejar algunos aspectos claros en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia y en ese sentido esta Sala a partir del precedente jurisprudencial a identificado los siguientes conceptos:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM¹.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que

¹Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador².

3. Los **gastos de administración**³, concepto consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafín y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a **Colpensiones**, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁴, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁵.

Finalmente, en este aspecto se recuerda la necesidad que estos conceptos sean asumidos por la administradora con cargo a su propio patrimonio y debidamente indexados⁶.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁷.

A partir de lo anterior, encuentra la Sala que le asistió razón a la juez de primera instancia al ordenar la devolución de cuotas de administración, seguros previsionales y prima de reaseguros, debiendo **ADICIONAR** la sentencia para indicar que esas sumas deben ser trasladadas debidamente indexadas.

²Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

³ Se debe realizar la devolución de estos conceptos indexados conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL-3871-2021, CSJ SL-4062-2021 y CSJ 4063-2021.

⁴ Sentencia SL-4360-2019.

⁵ Sentencia SL-2877-2020.

⁶En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

⁷Respecto de este particular se puede consultar la sentencia SL 2877-2020, providencia en la cual la Corte Suprema de Justicia encontró procedente la devolución de los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, máxime cuando estos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas en una subcuenta separada con el fin de financiar aquellas prestaciones.

ADICIONAR para ordenar que **Porvenir S.A.**, que traslade el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

De otro lado y al conocer en consulta la Sala encuentra pertinente y de acuerdo a lo establecido en las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, con el fin de que exista claridad en lo concerniente a los traslados que realizará el Fondo en lo referente a los valores y conceptos que se está trasladando, Adicionar la sentencia en cuanto que **Porvenir S.A.**, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a **Colpensiones**, estos conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Devolución del Bono Pensional Tipo A

Conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993 los bonos pensionales constituyen un aporte para conformar el capital que requieren los afiliados del Sistema General de Pensiones para financiar la pensión.

Los bonos tienen varias clasificaciones; importando para el caso que se resuelve el tipo A, que corresponden al afiliado que se traslada del régimen de prima media al régimen de ahorro individual.

Este mecanismo de financiación de la pensión antes de su pago debe surtir varias etapas entre las que se encuentran la emisión, expedición, redención y pago, en el caso estudiado, y dado que a la fecha se desconoce si este ha sido recibido por **Porvenir S.A.**, por lo que se revocará la decisión de primera instancia en cuanto ordenó su devolución a **Colpensiones**, indicando que en el caso en que se haya recibido el mismo deberá ser restituido a la oficina de bonos pensionales del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, para que esta entidad proceda con su anulación.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL-373 de 2021 y SL-4062 de 2021.

Del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003

El artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece que tendrán derecho a la pensión de vejez, los afiliados hombre que reúnan las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido 55 años. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementó la edad a 57 años.
2. 1000 semanas de cotización, incrementadas a 1050 a partir del 1 de enero de 2005, y en los años sucesivos a partir del 1 de enero de 2006 en 25 semanas hasta alcanzar en 2015 un número de 1300 semanas.

En el caso de la señora Luisa Fernanda Carreño Sarria se encuentra que nació el 21 de octubre de 1960 y cumplió 57 años de edad el día **21 de octubre de 2017** y acredita en toda su vida laboral **1307** semanas cotizadas, de acuerdo a la historia laboral aportada al proceso, concretamente 251.7 con Colpensiones y 1026 a Porvenir S.A.

Por lo que tiene satisfechos los requisitos para acceder a la pensión de vejez reclamada motivo por el cual se **Confirmará** el fallo en este aspecto consultado.

Disfrute de la prestación

En lo que tiene que ver con el momento en que la actora adquirió el status de pensionada no cabe duda que fue el **21 de octubre de 2017** cuando cumplió el requisito de 57 años y tenía más las 1300 semanas, sin embargo, como su última cotización fue para junio de 2020, tendrá derecho a su reconocimiento a partir del 1° de julio de esa anualidad.

De la cuantía de la prestación

A la actora le corresponde un IBL de los art. 21 y 34 de la ley 100 de 1993 y que al tener cotizadas más de 1250 semanas le corresponde verificar cuál es el más favorable, sin embargo, al proceder a estudiar la historia laboral del tiempo correspondiente a Colpensiones entre el año 1986 al 1998, no existe claridad de los salarios para esos periodos mes por mes, por lo que no es posible verificar si las cuentas que realizó la a quo son correctas y realizar únicamente la liquidación con el promedio de los últimos 10 años podría cercenar los derechos de la demandante, en el evento que pueda obtener un

IBL mayo por el de toda la vida o en su defecto afectar a la entidad a quien se le revisa en el grado de consulta.

Así las cosas, se modifica este aspecto y se ordena que sea Colpensiones quien proceda a liquidar la prestación teniendo en cuenta el art. 21 y 34 de la ley 100 de 1993, en los términos señalados por la a quo y que encuentra correctos la Sala.

Procedencia de la prescripción respecto de la pensión de vejez.

Con relación a la **excepción de prescripción** encuentra la Sala que la misma no se configura en el caso de autos por cuanto la reclamación se realizó el 20 de octubre de 2020 y la demanda se interpuso el 20 de noviembre de 2020. Sin que hubieren transcurrido el termino de 3 años contenido en el art. 151 del CPT y SS y 488 de Código laboral.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR, la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el día 16 de julio de 2022, en el proceso ordinario laboral promovido **LUISA FERNANDA CARREÑO SARRIA** contra **COLPENSIONES, Y PORVENIR S.A.**, en cuanto declaró la ineficacia del traslado y reconoció la pensión de vejez.

ADICIONAR la sentencia para indicar que esas sumas que ordenó trasladar a Colpensiones de cuotas de administración, seguros previsionales y reaseguros, se deben ser trasladadas **debidamente indexadas**.

ADICIONANDO para ordenar a **Porvenir S.A.**, que traslade el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

ADICIONAR la sentencia en cuanto que **Porvenir S.A.**, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a **Colpensiones**, estos conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

REVOCAR la decisión de primera instancia en cuanto ordenó devolución de Bono pensional a **Porvenir S.A.**, para en su lugar indicar que en el caso en que se haya recibido el mismo deberá ser restituido a la oficina de bonos pensionales del **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, para que esta entidad proceda con su anulación.

Se **MODIFICA** la sentencia para ordenar que sea Colpensiones quien proceda a liquidar la prestación de acuerdo a la parte motiva de la sentencia.

Sin costas en esta instancia

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**, el cual se fijará por el término de un día en la Secretaria de la Sala.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BÉDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Luisa Fernanda Carreño Sarria
DEMANDADO	Colpensiones, y Porvenir S.A.
RADICADO	05001-31-05- 018-2021-00438-01
DECISIÓN	Confirma, revoca y adiciona
MAGISTRADO PONENTE	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 02 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 02 de agosto de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO